

*Plaza pública*

para la edición del 2 de junio de 1996

## Maestros

Miguel Ángel Granados Chapa

No es un canje deseable, por supuesto: pero los garrotazos recibidos por decenas de maestros el 23 de mayo se trocaron en un sustancial avance de la disidencia magisterial, cuyos representantes ingresaron una semana después en la zona prohibida que rodea a la casa presidencial, fueron recibidos allí por funcionarios de alto nivel y hablarán mañana con el secretario de Educación. Nada de eso significa, aún, soluciones a los problemas que plantearon, pero evidencia que la represión es, ante sectores aguerridos, el mejor acicate para una lucha política.

La cuestión de fondo no podrá ser resuelta ahora y en ese marco, porque excede a las posibilidades de un movimiento como el del magisterio disidente, así esté en ascenso en varias porciones del país. Se trata de la pobreza de los salarios pagados a los trabajadores en general, y a los de la educación en particular. La remuneración a la fuerza de trabajo se ha achicado sistemáticamente en los últimos veinte años, de modo especial en los sexenios del neoliberalismo, a partir de 1982. La correspondiente a los maestros, si bien mostró un repunte notorio entre 1989 y 1994, apenas consiguió aliviar los rezagos acumulados, y se frenó de nuevo el año pasado, debido al doble efecto de la política

económica restrictiva (que incide sobre los salarios generales) y la reducción relativa del gasto social, incluido el destinado a educación.

En un asunto de prioridades: el gobierno privilegia el pago de sus obligaciones ante acreedores foráneos, a los que entrega puntualmente recursos generados por el trabajo de los mexicanos. O destina gruesas sumas al apoyo a instituciones bancarias cuya voracidad reclama cada día mayores sustentos. En esas condiciones, el Estado carece de recursos para remunerar adecuadamente a su personal. El presupuesto de egresos, cuyo proyecto es preparado en la secretaría de Hacienda y aprobado por la mayoría del PRI en la Cámara de Diputados, establece corsés apretados e inescapables.

El incremento del ciento por ciento, reclamado por la disidencia magisterial es más un símbolo que una demanda estricta. Sus autores saben tanto como los demás que se trata de una exigencia incumplible, que se enarbola anualmente para significar la insuficiencia de los aumentos obtenidos, cuyo monto es siempre muy escaso comparado con aquella meta ideal. Hay que referirse, en consecuencia, al incremento realmente alcanzable y a los mecanismos para acordarlo.

Aunque este año la negociación se integró con varios factores, el aumento que llega a todo el personal de la SEP es de 12 por ciento directo al salario, con retroactividad al primero de abril, y 10 por ciento a prestaciones, a partir del 16 de mayo. Nada para entusiasmar a nadie, ciertamente. La tasa es menor que las expectativas de inflación enunciadas por el gobierno,

con lo que de antemano se reconoce que el alza ni siquiera será suficiente para preservar el nivel de vida de los maestros. Pero ese fue el monto pactado entre quienes pueden hacerlo, la SEP y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.

Este es la agrupación social de mayor tamaño en el país, y su poderío político podría permitirle, si otros fueran su talante y su estructura, organizar una resistencia activa a un incremento salarial insatisfactorio. Pero, si bien en los últimos siete años se han generado importantes transformaciones en su interior (en buena parte debido a las presiones de la disidencia surgida hace ya 17 años), el SNTE mantiene una alianza con el Estado, que lo obliga a contener su capacidad de movilización, a fin de honrar compromisos institucionales que le han vedado, por ejemplo, acudir a la huelga formal aun en las épocas de peor trato salarial.

La mayor parte de los miembros del sindicato apoyan un comportamiento de esa naturaleza, si bien la disidencia representa una porción creciente de trabajadores de la educación. Los disidentes han cobrado fuerza en varias entidades (Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Chiapas y el Distrito Federal, por ejemplo) donde controlan la vida política seccional. En otros muchos estados su militancia es numerosa e influyente, y constituye corrientes que en los años recientes se suman a la integración de los comités directivos, en una reproducción de lo que ocurre en el nivel federal.

Se trata, pues, de un incremento salarial insuficiente, formalmente pactado, pero cuyos términos no admitidos

por una fracción de los afiliados. Se trata, por consecuencia, de un problema político, pues el jurídico está esencialmente resuelto. Como problema político, la cuestión es saber cuál de las partes dispone de poder para imponer sus decisiones a los demás, o para llevarlos a una negociación en que se da y se recibe, se avanza y se retrocede.

Hasta el viernes, la disidencia tenía capacidad de movilización, pero escaso margen de interlocución. Se le dijo, como corresponde a la verdad formal, que en el nivel federal todo está concluido, y dicha la última palabra. Pero los garrotes de David Garay Maldonado surtieron el efecto de una varita mágica (si bien son más contundentes al caer sobre cabezas y cuerpos), y hoy la disidencia es de nuevo un interlocutor de las autoridades. Carece por ahora de capacidad para suplir a la dirección formal del sindicato, que la ha instado a sumarse a otros modos de encaminarse a la misma meta. Pero ya hoy se sabe que hay franjas de la negociación bilateral que no pueden establecerse sin el concurso de la disidencia. Y quién sabe si el comité nacional se resignara a ocupar un papel secundario, a viajar en el cabuz.

El panorama se ha complicado debido a la diseminación de la autoridad educativa, y a que subsisten incongruencias derivadas del proceso de federalización. Factores locales, en consecuencia, adquieren un peso mayor que antaño en los conflictos magisteriales, como lo muestra la situación en Tamaulipas. Si bien la sección 30 del SNTE está gobernada por maestros institucionales, una abrumadora cantidad de sus

miembros se sumó esta vez a las movilizaciones del descontento, y mantienen un paro desde hace más de una semana, que alcanza a casi todo el sistema de educación básica. En ese caso hay demandas específicas, como la obtención de cuotas diferenciales por vida cara (la llamada rezonificación, que se demoró en todo el país desde septiembre pasado, y que al fijarse ahora no comprendió a municipios tamaulipecos que la requieren tanto como otros donde sí se aplica); y la protesta por adulteraciones al mecanismo de carrera magisterial (cuyo planteamiento original busca al mismo tiempo mejorar los salarios y consolidar la preparación de los maestros, pero que en Tamaulipas se deformó por preferencias políticas).

La tenaz movilización de los maestros tamaulipecos, adicionalmente, ocurre porque el sector magisterial es como un sensor que recoge las tensiones de sus comarcas. Y Tamaulipas ha visto crecer en los años recientes los factores de conflicto. Unos surgen de la naturaleza, como la sequía que afecta a la actividad agropecuaria y arroja nuevos pobres sobre las ciudades. Pero la mayor parte derivan de la mano del hombre, de la torpe mano del hombre. Así, junto con problemas de delincuencia violenta en aumento, pues el narcotráfico es una trágica realidad en el estado, la política económica ha hecho surgir otros muy relevantes. La supresión de medidas que hacían rentable la agricultura, por ejemplo, ha sumido en la postración a las regiones rurales.

A todo eso se agrega (y lo potencia) un gobernador de características singulares, cuyos arranques y gestos

serían hasta simpáticos si no tuvieran la trascendencia pública que les imprime el ser propios de un gobernante. Manuel Cavazos Lerma, amigo personal y cercano de Carlos Salinas (y ex colaborador de Manuel Bartlett en la secretaría de Gobernación) ejerce un autoritarismo folclórico que ha hecho crecer a la oposición, a la que combate con malas artes. Ha dispuesto, por ejemplo, que el ramo 26, la partida del gasto federal que se entregará a los gobiernos locales, sólo fluirá cuando haya condiciones normales en la entidad, lo que ha llevado al ayuntamiento de Tampico, ganado por Acción Nacional, a entablar una controversia constitucional para asegurarse el manejo directo y oportuno de recursos que el gobernador regatea o de plano niega.

Otros gobernadores enfrentan otra suerte de conflictos. El de Chihuahua, Francisco Barrio, eligió al comienzo de su administración hace cuatro años, una vía conciliatoria con el sindicalismo magisterial, muy cercano al PRI como todavía ocurre con el sector institucional. De hecho le confió la gestión del sistema escolar cuando en 1993 se inició la descentralización administrativa. Pero conductas y mecanismos que el gobernador juzgó abusivos y no estuvo dispuesto a tolerar produjeron un enfrentamiento que renace en coyunturas propicias como la presente, susceptibles de explotarse en provecho de intereses diversos. Y es que, amén de los desfasamientos institucionales en la impartición del servicio educativo, el sindicato mismo vive un proceso de reajuste que se expresa en esta coyuntura, todavía no sabemos hasta qué grado.

La profesora Elba Ester Gordillo no permaneció silenciosa en esta etapa de la vida magisterial, sobre todo a raíz de la agresión a sus compañeros. Hasta hace dos años, y en el lustro anterior, le correspondía estar en la incómoda posición en que ahora se halla el profesor Humberto Dávila Esquivel, de admitir unos incrementos con los que nadie puede estar de acuerdo. Ahora, desde su nuevo espacio sindical, la Confederación de Educadores Americanos, de la que es presidenta, no sólo expresó "su repudio ante la violencia que hizo víctimas a maestros" el jueves 23, sino que formuló juicios y demandas que no carerían en tierra yerma: "A los severos efectos de un empobrecimiento persistente, los trabajadores de la educación mexicanos suman ahora la agresión policiaca. Es preciso esclarecer los hechos, aplicar la ley a los responsables y evitar el riesgo de recurrir a fórmulas de poder que más temprano que tarde generan desarreglos sociales y pueden llevar a callejones sin salida. Los maestros del hemisferio americano afiliados a la CEA condenamos el uso de la fuerza pública contra la manifestación de las ideas y llamamos a la autoridad a privilegiar la política y a cancelar el uso de la fuerza".

Luego, a título personal, además de ratificar su condena a la agresión policiaca, la profesora Gordillo explicó que lo conseguido por el SNTE "en la negociación de este mes, fue evitar que, en una crisis que presiona a la caída de las percepciones de los trabajadores, el salario profesional magisterial disminuyera". La profesora Gordillo, durante cuya

gestión al frente del sindicato se abatieron los obstáculos a la expresión gremial y se consiguió que la paga magisterial pasara de 1.5 salarios mínimos a 3.54, otorga no sólo a su sindicato sino también al gobierno el mérito de que el salario no se deteriorara esta vez, "a diferencia de lo ocurrido en situaciones recesivas, como las de 1938, 1976 la de la década perdida".

La profesora Gordillo fue, como secretaria general del sindicato, y es hoy, "como ciudadana y maestra" según su propia definición, una activa buscadora de alternativas laborales y políticas. Animadora, con Jorge G. Castañeda y Raúl Padilla, de la iniciativa denominada Los compromisos con la nación, que concluyó en abril sus primeros trabajos con una exhortación a crear un frente ciudadano, parece haber consolidado en el SNTE una corriente política que podría dar un nuevo cariz al sindicato. Bajo su nuevo liderazgo, el SNTE no se ha apartado del Foro "El sindicalismo ante la nación" alentado por la anterior dirección gremial, y fue más allá este año, pues el primero de mayo empujó la marcha realizada en sentido contrario a las consignas del Congreso del Trabajo y fue uno de los impugnadores del fondo y la forma de su reciente relevo.

No obstante esos aires de renovación, su compromiso con el Estado llevó al SNTE a fijar un incremento salarial impugnado por un vasto sector que ahora ha conseguido interlocución con el gobierno. No parece posible una nueva negociación salarial, del gobierno con una corriente paralela a la encabezada por el comité nacional del SNTE. Pero el solo hecho de que

se admita el diálogo con una disidencia fortalecida (que con esos logros se afianza aún más) puede llevar a la dirección del magisterio nacional a una cavilación sobre el costo de mantenerse en la retaguardia, pagando costos políticos elevados, en vez de recoger la inconformidad de sus agremiados, aun la expresada ahora por sus adversarios.

Si se operara un corrimiento del SNTE hacia posiciones menos fieles a los fines gubernamentales, más próximas a su propia causa, comprobaríamos que los toletes de los granaderos habrán sido, en realidad, varitas mágicas capaces de obrar prodigios.

# Maestros

Creciente la disidencia magisterial, pasó de ser golpeada a sentarse ante la mesa de la interlocución con el gobierno, lo que puede orillar al SNTE a meditar si conviene a sus intereses mantener su fidelidad a los fines del gobierno más que a los de sus representados.

NO ES UN CANJE DESEABLE, POR SUPUESTO: pero los garrotazos recibidos por decenas de maestros el 23 de mayo se trocaron en un sustancial avance de la disidencia magisterial, cuyos representantes ingresaron una semana después en la zona prohibida que rodea a la casa presidencial, fueron recibidos allí por funcionarios de alto nivel y hablarán mañana con el secretario de Educación. Nada de eso significa, aún, soluciones a los problemas que plantearon, pero evidencia que la represión es, ante sectores agueridos, el mejor acicate para una lucha política.

La cuestión de fondo no podrá ser resuelta ahora y en ese marco, porque excede a las posibilidades de un movimiento como el del magisterio disidente, así esté en ascenso en varias porciones del país. Se trata de la pobreza de los salarios pagados a los trabajadores en general, y a los de la educación en particular. La remuneración a la fuerza de trabajo se ha achicado sistemáticamente en los últimos veinte años, de modo especial en los sexenios del neoliberalismo, a partir de 1982. La correspondiente a los maestros, si bien mostró un repunte notorio entre 1989 y 1994, apenas consiguió aliviar los rezagos acumulados, y se frenó de nuevo el año pasado, debido al doble efecto de la política económica restrictiva (que incide sobre los salarios generales) y la reducción relativa del gasto social, incluido el destinado a educación.

En un asunto de prioridades: el gobierno privilegia el pago de sus obligaciones ante acreedores foráneos, a los que entrega puntualmente recursos generados por el trabajo de los mexicanos. O destina gruesas sumas al apoyo a instituciones bancarias cuya voracidad reclama cada día mayores sustentos. En esas condiciones, el Estado carece de recursos para remunerar adecuadamente a su personal. El presupuesto de egresos, cuyo proyecto es preparado en la secretaría de Hacienda y aprobado por la mayoría del PRI en la Cámara de Diputados, establece corsés apretados e inescapables.

El incremento del ciento por ciento, reclamado por la disidencia magisterial es más un símbolo que una demanda estricta. Sus autores saben tanto como los demás que se trata de una exigencia incumplible, que se enarbola anualmente para significar la insuficiencia de los aumentos obtenidos, cuyo monto es siempre muy escaso comparado con aquella meta ideal. Hay que referirse, en consecuencia, al incremento realmente alcanzable y a los mecanismos para acordarlo.

Aunque este año la negociación se integró con varios factores, el aumento que llega a todo el personal de la SEP es de 12 por ciento directo al salario, y 10 por ciento a prestaciones, a partir del 16 de mayo. Nada para entusiasmar a nadie, ciertamente. La tasa es menor que las expectativas de inflación enunciadas por el gobierno, con lo que de antemano se reconoce que el alza ni siquiera será suficiente para preservar el nivel de vida de los maestros. Pero ese fue el monto pactado entre quienes pueden hacerlo, la SEP y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.

Este es la agrupación social de mayor tamaño en el país, y su poderío político podría permitirle, si otros fueran su talante y su estructura, organizar una resistencia activa a un incremento salarial insatisfactorio.

Pero, si bien en los últimos siete años se han generado importantes transformaciones en su interior (en buena parte debido a las presiones de la disidencia surgida hace ya 17 años), el SNTE mantiene una alianza con el Estado, que lo obliga a contener su capacidad de movilización, a fin de honrar compromisos institucionales que le han vedado, por ejemplo, acudir a la huelga formal aun en las épocas de peor trato salarial.

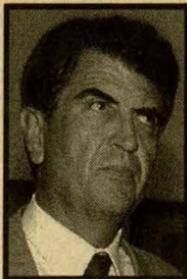
La mayor parte de los miembros del sindicato apoyan un comportamiento de esa naturaleza, si bien la disidencia representa una porción creciente de trabajadores de la educación. Los disidentes han cobrado fuerza en varias entidades (Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Chiapas y el Distrito Federal, por ejemplo) donde controlan la vida política seccional. En otros muchos estados su militancia es numerosa e influyente, y constituye corrientes que en los años recientes se suman a la integración de los comités directivos, en una reproducción de lo que ocurre en el nivel federal.

Se trata, pues, de un incremento salarial insuficiente, formalmente pactado, pero cuyos términos no admitidos por una fracción de los afiliados. Se trata, por consecuencia, de un problema político, pues el jurídico está esencialmente resuelto. Como problema político, la cuestión es saber cuál de las partes dispone de poder para imponer sus decisiones a los demás, o para llevarlos a una negociación en que se da y se recibe, se avan-

za y se retrocede.

Hasta el viernes, la disidencia tenía capacidad de movilización, pero escaso margen de interlocución. Se le dijo, como corresponde a la verdad formal, que en el nivel federal todo está concluido, y dicha la última palabra. Pero los garrotes de David Garay Maldonado surtieron el efecto de una varita mágica (si bien son más contundentes al caer sobre cabezas y cuerpos), y hoy la disidencia es de nuevo un interlocutor de las autoridades.

Carece por ahora de capacidad para suplir a la dirección formal del sindicato, que la ha instado a sumarse a otros modos de encaminarse a la misma meta. Pero ya hoy se sabe que hay franjas de la negociación bilateral que no pueden establecerse sin el concurso de la disiden-



El secretario de Educación Pública, Miguel Limón Rojas, conversará hoy con los líderes

de la disidencia magisterial, aunque desde el punto de vista formal haya concluido la revisión de los salarios como tiene que hacerse cada año con la dirección sindical.

cia. Y quién sabe si el comité nacional se resignará a ocupar un papel secundario, a viajar en el cabuz.

El panorama se ha complicado debido a la diseminación de la autoridad educativa, y a que subsisten incongruencias derivadas del proceso de federalización.

Factores locales, en consecuencia, adquieren un peso mayor que antaño en los conflictos magisteriales, como lo muestra la situación en Tamaulipas. Si bien la sección 30 del SNTE está gobernada por maestros institucionales, una abrumadora cantidad de sus miembros se sumó esta vez a las movilizaciones del descontento, y mantienen un paro desde hace más de una semana, que alcanza a casi todo el sistema de educación básica. En ese caso hay demandas específicas, como la obtención de cuotas diferenciales por vida cara (la llamada rezonificación, que se demoró en todo el país desde septiembre pasado, y que al fijarse ahora no comprendió a municipios tamaulipecos que la requieren tanto como otros donde sí se aplica); y la protesta por adulteraciones al mecanismo de carrera magisterial (cuyo planteamiento original busca al mismo tiempo mejorar los salarios y consolidar la preparación de los maestros, pero que en Tamaulipas se deformó por preferencias políticas).

La tenaz movilización de los maestros



Como presidenta de la Confederación de Educadores de América, la ex secretaria

general del SNTE, profesora Elba Esther Gordillo, condenó la agresión de granaderos a maestros, y explicó el significado de la negociación salarial.

tamaulipecos, adicionalmente, ocurre porque el sector magisterial es como un sensor que recoge las tensiones de sus comarcas. Y Tamaulipas ha visto crecer en los años recientes los factores de conflicto. Unos surgen de la naturaleza, como la sequía que afecta a la actividad agropecuaria y arroja nuevos pobres sobre las ciudades.

Pero la mayor parte derivan de la mano del hombre, de la torpe mano del hombre. Así, junto con problemas de delincuencia violenta en aumento, pues el narcotráfico es una trágica realidad en el estado, la política económica ha hecho surgir otros muy relevantes. La supresión de medidas que hacían rentable la agricultura, por ejemplo, ha sumido en la postración a las regiones rurales.

A todo eso se agrega (y lo potencia) un

governador de características singulares, cuyos arranques y gestos serían hasta simpáticos si no tuvieran la trascendencia pública que les imprime el ser propios de un gobernante.

Manuel Cavazos Lerma, amigo personal y cercano de Carlos Salinas (y ex colaborador de Manuel Bartlett en la secretaría de Gobernación) ejerce un autoritarismo folclórico que ha hecho crecer a la oposición, a la que combate con malas artes. Ha dispuesto, por ejemplo, que el ramo 26, la partida del gasto federal que se entregará a los gobiernos locales, sólo fluirá cuando haya condiciones normales en la entidad, lo que ha llevado al ayuntamiento de Tampico, ganado por Acción Nacional, a entablar una controversia constitucional para asegurarse el manejo directo y oportuno de recursos que el gobernador regatea o de plano niega.

Otros gobernadores enfrentan otra suerte de conflictos. El de Chihuahua, Francisco Barrio, eligió al comienzo de su administración hace cuatro años, una vía conciliatoria con el sindicalismo magisterial, muy cercano al PRI como todavía ocurre con el sector institucional. De hecho le confió la gestión del sistema escolar cuando en 1993 se inició la descentralización administrativa. Pero conductas y mecanismos que el gobernador juzgó abusivos y no estuvo dispuesto a tolerar produjeron un enfrentamiento que renace en coyunturas propicias como la presente, susceptibles de explotarse en provecho de intereses diversos. Y es que, amén de los desfases institucionales en la impartición del servicio educativo, el sindicato mismo vive un proceso de reajuste que se expresa en esta coyuntura, todavía no sabemos hasta qué grado.

La profesora Elba Esther Gordillo no permaneció silenciosa en esta etapa de la vida magisterial, sobre todo a raíz de la agresión a sus compañeros. Hasta hace dos años, y en el lustro anterior, le correspondía estar en la incómoda posición en que ahora se halla el profesor Humberto Dávila Esquivel, de admitir unos incrementos con los que nadie puede estar de acuerdo. Ahora, desde su nuevo espacio sindical, la Confederación de Educadores Americanos, de la que es presidenta, no sólo expresó "su repudio ante la violencia que hizo víctimas a maestros" el jueves 23, sino que formuló juicios y demandas que no caerían en tierra yerma: "A los severos efectos de un empobrecimiento persistente, los trabajadores de la educación mexicanos suman ahora la agresión policiaca. Es preciso esclarecer los hechos, aplicar la ley a los responsables y evitar el riesgo de recurrir a fórmulas de poder que más temprano que tarde generan desarreglos sociales y pueden llevar a callejones sin salida. Los maestros del hemisferio americano afiliados a la CEA condenamos el uso de la fuerza pública contra la manifestación de las ideas y llamamos a la autoridad a privilegiar la política y a cancelar el uso de la fuerza".

Luego, a título personal, además de ratificar su condena a la agresión policiaca, la profesora Gordillo explicó que lo conseguido por el SNTE "en la negociación de este mes, fue evitar que, en una crisis que presiona a la caída de las percepciones de los trabajadores, el salario profesional magisterial disminuyera". La profesora Gordillo, durante cuya gestión al frente del sindicato se abatieron los obstáculos a la expresión gremial y se consiguió que la paga magisterial pasara de 1.5 salarios mínimos a 3.54, otorga no sólo a su sindicato sino también al gobierno el mérito de que el salario no se deteriorara esta vez, "a diferencia de lo ocurrido en situaciones recesivas, como las de 1938, 1976 la de la década perdida".

La profesora Gordillo fue, como secretaria general del sindicato, y es hoy, "como ciudadana y maestra" según su propia definición, una activa buscadora de alternativas laborales y políticas. Animadora, con Jorge G. Castañeda y Raúl Padilla, de la iniciativa denominada "Los compromisos con la nación", que concluyó en abril sus primeros trabajos con una exhortación a crear un frente ciudadano, parece haber consolidado en el SNTE una corriente política que podría dar un nuevo cariz al sindicato. Bajo su nuevo liderazgo, el SNTE no se ha apartado del Foro "El sindicalismo ante la nación" alentado por la anterior dirección gremial, y fue más allá este año, pues el primero de mayo empujó la marcha realizada en sentido contrario a las consignas del Congreso del Trabajo y fue uno de los impugnadores del fondo y la forma de su reciente relevo.

No obstante esos aires de renovación, su compromiso con el Estado llevó al SNTE a fijar un incremento salarial impugnado por un vasto sector que ahora ha conseguido interlocución con el gobierno. No parece posible una nueva negociación salarial, del gobierno con una corriente paralela a la encabezada por el comité nacional del SNTE. Pero el solo hecho de que se admita el diálogo con una disidencia fortalecida (que con esos logros se afianza aún más) puede llevar a la dirección del magisterio nacional a una cavilación sobre el costo de mantenerse en la retaguardia, pagando costos políticos elevados, en vez de recoger la inconformidad de sus agremiados, aun la expresada ahora por sus adversarios.

Si se operara un corrimiento del SNTE hacia posiciones menos fieles a los fines gubernamentales, más próximas a su propia causa, comprobaríamos que los toletes de los granaderos habrán sido, en realidad, varitas mágicas capaces de obrar prodigios.